

Demonios, salvadores de la patria y jóvenes idealistas. Tres discursos sobre el terrorismo de Estado

Gastón Julián Gil*

* CONICET - Universidad Nacional de Mar
del Plata.

) 164 (

do” sea un rasgo indeleble de cualquier
contexto histórico, nos enfrentamos
en este caso a “un pasado en
permanente proceso de «actualización
» y que, por lo tanto, interviene
en las proyecciones a futuro elaboradas
por sujetos y comunidades”.³ La
problemática de la memoria se hace
aquí relevante, porque se trata de
“un proceso inherente a la existencia
misma de los conjuntos sociales”,⁴ a
partir de lo cual resulta esencial la
consideración de “dos aspectos básicos:
*los procedimientos interpretativos
y sus condiciones sociales de producción
y uso*”.⁵ Crenzel propone, en
relación a las lecturas sobre el terrorismo
de estado, “el concepto de *régimen
de memoria* para retratar aquellas
«memorias emblemáticas» que
se tornan hegemónicas en la escena
pública al instaurar, a través de prácticas
y discursos diversos, los marcos
de selección de lo memorable y
las claves interpretativas y los estilos
narrativos para evocarlos, pensarlo y
transmitirlo”⁶. Se trata, en palabras
de Jelin, de “analizar el proceso de
rememorar (y olvidar), y los varios
niveles y capas en los cuales esto se
da”,⁷ es decir, los vínculos entre los
hechos que se recuerdan y el lugar
que ocupan en nuestro presente, en
medio de fuertes luchas políticas por
imponer sentido. De allí la relevancia
de quienes tienen la autoridad y
el derecho de fijar y personificar memorias,
ya que “en la medida en que

no hay canales institucionalizados
oficiales que reconozcan la experiencia
del pasado reciente de violencia
y represión, la lucha sobre la «verdad
» y sobre las memorias «apropiadas
» se despliega en el escenario
societal” .⁸

Si bien la multiplicidad de voces y
subjetividades que se han producido
en los últimos treinta años configuran
un panorama caracterizado por
las luchas por el sentido, las contradicciones
y fragmentaciones, es posible
plantear una aproximación explicativa
que dé cuenta de los regímenes
y niveles de memoria que se han ido
produciendo y utilizando en relación
a nuestro pasado reciente. Si bien se
consideran otro tipo de textos (periodísticos,
académicos) se pone especial
énfasis en documentos estatales
que en mayor o menor medida impactaron
sobre los diversos regímenes
y niveles de memoria. Además,
este artículo parte de la convicción
de que el genocidio de carácter ideológico
y “reorganizador” ⁹ perpetrado
por las Fuerzas Armadas no fue
sino la consecuencia de un complejo
proceso que de ningún modo se
inició con el golpe de estado de 1976
de espaldas a una sociedad que nada
tuvo que ver antes con la violencia¹⁰.
Claro está que el gobierno dictatorial
inaugurado en marzo de 1976 constituyó
una evidente ruptura en la vida
institucional de la Argentina, instaurando
un régimen de carácter:
impersonal, del conjunto de las
fuerzas armadas, que procuraba
evitar la personalización del poder
a través de un sistema de normas
que establecía un cuerpo colegiado
(la Junta Militar) como órgano
supremo del Estado, y un órgano
impersonal (el Presidente de la
Nación) como ejecutor de las grandes

políticas trazadas por el poder
supremo.¹¹

Al dictaminar que la sociedad argentina
se encontraba jaqueada por
un desorden que hacía peligrar la integridad
del cuerpo social, la junta
militar también definió el contenido
sustantivo de ese orden que buscaba
instaurar. Esa intervención se asen)

165 (taba por supuesto en las propias características
de la cultura política nacional
que estableció un consenso a
partir del cual las Fuerzas Armadas
se constituyeron de manera creciente
– sobre todo a partir de la década del
sesenta¹²– como un actor legítimo
en los asuntos de la política nacional.
En este caso, frente al fantasma de la
disolución nacional, se le asignó “a
los militares la condición que siempre
se habían atribuido a sí mismos:
la de garantía última de la unidad y
el orden de la nación”.¹³ Esa legitimidad
para actuar como resguardo del
orden social que avasalló sistemáticamente
la legalidad llevó a ese juego
pendular entre los partidos políticos
y los militares, caracterizado
por complejas relaciones de aliadoadversario,
a un punto extremo en
el ejercicio de la violencia política. El
nuevo gobierno operó sobre un amplio
consenso social, pero se trataba
de una legitimidad precaria que
se asentaba principalmente en el origen,
es decir, sobre “la ilusión de una
«perfecta coincidencia»”,¹⁴ que en
menos de dos años comenzaría a resquebrajarse
paulatinamente.

Sobre los dos demonios y la interpretación “democratista”¹⁵

Como se mencionó más arriba, el
término genocidio ha sido utilizado
especialmente por los organismos
de derechos humanos para definir la

acción represiva del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Sin embargo, se trata de un uso que si bien puede cosechar una relativa amplia aceptación, no por ello está exento de controversias. Desde que el término comenzó a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial está sujeto a debates jurídicos que escapan por supuesto los alcances de este trabajo. De cualquier modo, en el caso del terrorismo de estado, es sobre ese término que han girado gran parte de los enfrentamientos discursivos que intentan definir con precisión las acciones de aniquilamiento encaradas por el gobierno militar. En ese sentido, ha habido desde la restauración democrática en 1983 diversas lecturas hegemónicas sobre este tema. La aproximación explicativa que se configuró como la versión oficial en los iniciales años de democracia se conoce como *teoría de los dos demonios*, simbolizada en el prólogo escrito por el famoso literato Ernesto Sabato en *Nunca Más*, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).¹⁶ Crenzel detalla que “mientras el tratamiento jurídico del pasado fue parte central de la estrategia de Alfonsín respecto de las violaciones a los derechos humanos, el modo de elaborar una verdad sobre ellas se modeló al calor de la demanda de los organismos de derechos humanos y la oposición política. Es decir, los dos mecanismos de justicia transicional del gobierno de Alfonsín tuvieron orígenes diferentes”.¹⁷ Aunque gozó de una importante adhesión – avalada además por el radicalismo que ganó las elecciones en 1983 y que propició

el juicio a las Juntas Militares, máximas responsables del genocidio- fue abandonada con el tiempo como explicación analítica y severamente cuestionada desde lo ideológico por una supuesta indistinción de las responsabilidades en la violencia política entre los grupos guerrilleros y las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado.
) 166 (

Esta *teoría de los dos demonios* puede ser resumida, a grandes rasgos, como una lectura de la violencia política que identifica dos fuerzas (las organizaciones político-militares y las Fuerzas Armadas) que actuaron al margen de la ley y por encima de la sociedad. En el prólogo mencionado de *Nunca Más*, se explica que “durante la década del 70 Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”¹⁸. Pese a que muchos de los cuestionamientos posteriores a esta postura señalan que se colocaba en pie de igualdad a las organizaciones político-militares con la represión militar, el escrito detalla que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos” (p. 7).¹⁹ Tampoco se justifica en este prólogo el accionar represivo ya que se juzga que “la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído

y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad” (p. 7). En cuanto a los derechos humanos, se especifica que “fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática” (p. 8), a través de “sádicos pero regimentados ejecutores” (p. 8). Uno de los puntos más polémicos está referido a la postulación explícita de cierta expiación colectiva en los procesos de violencia política. Aunque sin entrar en detalle, subyace la idea de una sociedad que asistió inerme a la violencia (de “ambos lados”), a la que se considera la principal víctima de ambos extremismos, aunque uno de ellos (el de derecha, el militar) con responsabilidades que no se pueden equiparar con el otro (que, se enuncia, debería haber sido combatido con la ley en la mano). El texto de Sábato señala en ese sentido que “en cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror” (p. 9). Como el texto de Sábato preveía los cuestionamientos de los defensores del accionar militar, cuya presencia pública y – no es aconsejable olvidar– amenaza concreta a las instituciones democráticas seguía vigente, se aclaraba que la función de la comisión no había sido juzgar los delitos descriptos sino investigar “la suerte corrida por los desaparecidos,

cualesquiera que fueran, proviniesen de uno u otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos” (p. 11). Finalmente, el prólogo se pronuncia acerca de la democracia, en consonancia con el espíritu de época que confiaba en la capacidad de las instituciones democráticas para resolver los principales problemas del

) 167 (

país, resumida en uno de los *slogan* de la campaña electoral que depositó a Raúl Alfonsín en la presidencia de la Nación en 1983: “con la democracia, se cura y se educa”. La conclusión expresaba entonces que “únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado” (p. 11). De algún modo, se podría postular la existencia de dos *teorías de los dos demonios*, una *versión fuerte* y una *versión débil*, ya que su planteo – que dista de analizar minuciosamente los hechos o entrar en detalles de los procesos históricos– permite interpretaciones de diversos matices. La primera de las dos lecturas posibles – la *versión fuerte*– es seguramente una explicación sumamente endeble y hacia donde apuntan las principales críticas al célebre prólogo del *Nunca Más*. Esta *versión fuerte* descansa prioritariamente sobre la mencionada expiación colectiva de la sociedad argentina que subyace en

el planteo. De acuerdo con esa interpretación, la sociedad plena habría asistido indefensa a dos fanatismos extremistas que, si bien no son colocados en pie de igualdad, sumieron a la población en una violencia generalizada sin tener grado de participación alguna. Al analizar retrospectivamente la violencia política como producto de fanatismos sin real anclaje social, la sociedad aparece como víctima y testigo a la vez. Los dos extremismos serían entonces fuerzas guiadas por intereses sectoriales, el primero de los cuales (las organizaciones guerrilleras) responsable de atacar el orden institucional y crear las condiciones para que se generara una respuesta desmedida por parte del Estado que, amparado en la suma del poder público, no midió métodos y consecuencias en un combate que, de todos modos, debía hacerse. Más allá de los cuestionamientos ideológicos y terminológicos (caracterizar de “terrorismo” a las organizaciones revolucionarias), esta *versión fuerte* falla claramente por lo inverosímil, al presentar una sociedad ajena a los profundos conflictos sociopolíticos de la época y ni siquiera admitir la complejidad del entramado histórico argentino en la segunda mitad del siglo XX que derivó en niveles tan altos de violencia política. En su análisis de este texto, Crenzel indica precisamente que una de sus principales falencias radica en la deshistorización de la violencia política, presentando además la identidad de los desaparecidos como “una «masa abierta» que crece en espiral”.²⁰ Además, advierte el mismo autor, al postular el estatuto de “víctimas inocentes” excluye a los militantes revolucionarios, por lo que la denuncia de violación de

los derechos humanos “se asienta en la condición moral de las víctimas, más que en el carácter universal e inalienable de estos derechos” .²¹ Esa condición de cierta “ajenidad” con la violencia política que estos discursos le asignan a la sociedad en su conjunto, ha sido severamente cuestionada. Levín postula una interpretación que no muestre “ni sociedad víctima ni tampoco sociedad verdugo” .²² De ese modo, destaca las características autoritarias presentes en el cuerpo social que favorecieron cierto “consenso y consentimiento implícito y

) 168 (explícito a los objetivos del régimen, omitiendo incluso el cuestionamiento de su mitología represiva” .²³ Sin negar que la sociedad en su conjunto fue víctima del accionar represivo, la autora se apoya en testimonios que dan cuenta de variadas estrategias de negación de un “horror” que aparecía como evidente en muchas circunstancias, tal cual ocurría con los vecinos de los centros clandestinos de detención. Por ello, “los testimonios analizados hasta el momento hablan, indiscutiblemente, de que cierta información sobre esa realidad circulaba y se filtraba de diversas formas por la sociedad. Con lo cual, nuevamente, es imperioso revisar y discutir la representación de la sociedad ignorante” ²⁴.

Sin embargo, la *versión débil*, presenta otras aristas que – si bien no parecen estar dadas las condiciones para retomarse explícitamente ante la opinión pública– presenta argumentos y datos dignos de considerarse. Según esta posible lectura de la *teoría de los dos demonios*, estaríamos en presencia de un panorama en el que sin proceder a la expiación

colectiva condena por supuesto
el accionar represivo de las Fuerzas
Armadas sin por ello reivindicar las
acciones de las guerrillas revolucionarias.
Por el contrario, esta posición
consistiría en condenar las organizaciones
político-militares (peronistas
y no peronistas) por sus acciones
contra el gobierno democrático y la
violencia política ejercida que crearon
las condiciones para que se gestara
una represión indiscriminada y
un golpe militar cuya responsabilidad
de ningún modo puede equipararse
a la guerrilla. La única comparación
– que no significa equiparar
responsabilidades– apunta al uso
de la violencia y la muerte como un
medio para conseguir objetivos políticos,
sean estos “un mundo mejor”
o los “valores occidentales y cristianos” .

Un artículo aparecido en *La Nación* el 21 de agosto de 1984 escrito
por el filósofo Tomás Moro Simpson
sintetiza con suma precisión esta mirada
sobre los años setenta. El texto
titulado “La barbarie argentina” comienza
con una cita de un poema de
Ricardo Molinari que reza: “«A los
argentinos nos gustó la sangre»” que
aplica a los tiempos vividos en la Argentina
reciente. Allí, Simpson define
la violencia política de los años
setenta como el surgimiento de “una
Argentina salvaje que nos desconcierta
y atemoriza” . Tras sentar como
premisa que “muchas personas inocentes
han sido asesinadas por la
guerrilla y las fuerzas que la combatieron”
asegura que:
los guerrilleros debieron haber
sido enfrentados siempre de manera
legítima, muertos en combate
o juzgados y condenados
por cortes militares. ¿Era necesario
además que hubiera miles de
desaparecidos, entre ellos muchos

adolescentes que cometieron el
«delito» de figurar en una libreta
de teléfonos? ¿Era necesario proclamar
la «metodología» de asesinar
a cien con la esperanza de que
hubiese entre ellos cinco subversivos?
Esta aritmética macabra no es
honrosa para nadie, y la ciudadanía
solo puede sentir pavor cuando
es adoptada por el Estado, que
tiene la sagrada obligación de garantizar
la seguridad de las personas.
¿Era necesario hacer desaparecer
hasta los cadáveres, prolongando
sin término la agonía y la
esperanza incierta de miles de familias?

) 169 (

Más adelante Simpson se refiere a
la identidad política de las víctimas,
otro de los aspectos controversiales
que hacen a las interpretaciones de
ese pasado traumático:
algunas madres que se refieren a
los ideales de sus hijos desaparecidos
no contribuyen así a la causa
de los derechos humanos. Expreso
mi admiración sin reservas por
esas mujeres que en los años del
terror y el miedo desfilaron con
enorme coraje alrededor de la Pirámide
de Mayo. Pero no se trata
ahora de la justificación o condena
de esos ideales, sino de algo infinitamente
más básico y elemental: el
respeto por la vida y las garantías
jurídicas en una comunidad civilizada.
Ello le permite al autor condenar
sin reservas el uso de la violencia,
“por generosas que sean las banderas
con que se envuelve. La barbarie
no puede ser nunca un medio, porque
corrompe a los hombres que la
usan y transforma los fines generosos
en realidades abyectas”. Ya hacia
el final del artículo, y citando a
Aldous Huxley, Simpson describe a
los “cristianos negativos”, hombres
fascinados por ese demonio (el enemigo)
que combaten a toda costa sin

mediar actos y consecuencias. Estos
“hombres negativos” terminan entonces
transformándose en ese mismo
mal que combaten y justifican
“sus actos ominosos alegando que
otros empezaron primero”, pese a
que “la cadena de causas y de efectos
es demasiado compleja, demasiado
dudosa, y la barbarie de ayer no
ennoblece la barbarie de hoy. Las cadenas
causales pueden ser cuestionadas
o prolongables al infinito; solo
la barbarie misma posee una evidencia
pavorosa y tangible”. El artículo
termina señalando que
no hay reparación posible para la
ausencia de la muerte: no existe en
la Tierra una balanza que equilibre
el sufrimiento y la muerte de
los seres queridos. Nada es más
profundamente triste que ver a las
madres de uno y otro bando intercambiando
injurias. Porque ninguna
de ellas es culpable de lo ocurrido;
todas ellas son víctimas; todas
debieron abrazarse y llorar juntas
la muerte infausta de sus hijos.
La obra paradigmática de esta *teoría
de los dos demonios* es seguramente
Montoneros. La soberbia armada, de
Pablo Giussani, que ha sido interpretada
mayormente en la *versión fuerte*.
Hoy severamente condenada desde
lo ideológico hasta lo moral por quienes
reivindican la militancia revolucionaria,
la obra de este periodista ha
sido colocada como parte de la estrategia
discursiva del radicalismo en
la restauración democrática. El libro
de Giussani parte de una premisa
base que da por probada: “la criminalidad
del régimen instaurado en la
Argentina el 24 de marzo de 1976”.²⁵
Por ello, y de allí que el libro sea colocado
como uno de los paradigmas
de la *teoría de los dos demonios*, es que
fundamenta los alcances de su trabajo
en refutar “un peculiar estado de

conciencia que genera en cierta clase
media ilustrada predisposiciones
a compartir, comprender o disculpar
toda irregularidad que se cometa
en nombre de la revolución” .²⁶ Claro
está que se trata de un libro que
no ahorra adjetivaciones que pueden
llegar a herir sensibilidades de quienes
reclaman mayor respeto por las
luchas del pasado. Sin sospechar los
avatares interpretativos que se producirían
décadas después, Giussani

) 170 (

afirmaba que “condenar a los montoneros
ya es en el país moneda corriente,
casi una moda, por cierto más
saludable que la moda precedente
de ensalzarlos” .²⁷ De hecho, define
la militancia en el peronismo revolucionario
como snobismo, un “impulso
rebelde a la contestación y a la inversión
de valores que figuran entre
los estimulantes de esta transmigración
cultural” .²⁸ Por ello, continúa
detallando “la sofisticación suprema
de «hacerse peronistas», incorporando
el villero *look* a la indumentaria
de moda en Palermo Chico y ensayando
modulaciones de afectada familiaridad
para llamar «el Viejo» a
Juan Perón” .²⁹ No era otra cosa que
una pequeña burguesía que “buscó
nuevas formas de distinción apropiándose
de una identidad popular
palabrotera, grasienta y de uñas sucias
que solo existía en sus propias
fantasías populistas” .³⁰

Giussani intenta en su libro describir
una secuencia histórica que
germinó en las organizaciones político-
militares latinoamericanas. Así,
detalla un clima político ideológico
en los años sesenta en el que se daba
por sentado que cuando el pueblo
tomara la suficiente conciencia del
fascismo escondido detrás de las diversas

estructuras (incluso la democracia) iba a responder en masa al llamado a la resistencia popular. Por lo tanto, la premisa básica era: “«Hay que desenmascarar al fascismo». Y el primer paso de este desenmascaramiento era la denuncia, el intento de «concienciar» a la gente y de abrirle los ojos sobre la verdad del enemigo emboscado” .³¹ El autor liga entonces la génesis de la violencia guerrillera a la instrumentalización de esa consigna, bajo la forma de una “contraviolencia concientizante” .³² En ese contexto, incluso los golpes de estado (como lo sería en parte el de 1976) eran esperados con entusiasmo como una manera más rápida de despertar la conciencia revolucionaria. Al ocuparse en detalle de Montoneros,³³ el autor asegura que “les tocó vivir una realmente dramática contradicción ente la mayor oportunidad jamás concedida a un grupo de izquierda en la Argentina para la construcción de un gran movimiento político y la cotidiana urgencia infantil por inmolar esa posibilidad al deleite de ofrecer un testimonio tremebundo de sí mismo” .³⁴ De esa manera establece una distinción en el deseo de concreción de una revolución, propia del político revolucionario, del deseo de ser un revolucionario, característica del militante de extrema izquierda. Esa “necesidad” de concretar la revolución queda entonces “reducida a pura iconografía: el birrete guerrillero, la estrella de cinco puntas, los brazos en alto enarbolando ametralladoras” .³⁵ De allí que haga referencia a un “narcisismo revolucionario” que hace un culto a esas imágenes que configuran “un póster de tema heroico” .³⁶ En el terreno de las comparaciones

entre Montoneros y las Fuerzas Armadas, Giussani considera que “unos y otros se parecían como dos gotas de agua en los contenidos faraónicos de su autoconciencia y en la manera de concebir sus relaciones rectoras, paternales, correctivas y manipuladoras con los hormigueros de la civilidad” .³⁷ Incluso va más allá al definirlos como “dos simétricos totalitarismos militares” guiados por las leyes de la guerra y una relación instrumental con la población civil, a la que asignaban el papel de escudero. Por ello, el autor afirma que tanto) 171 (militares como Montoneros se autoasignaban el derecho a “matar, herir o humillar como fuente de júbilo y de emociones placenteras” .³⁸ Los juicios adversos hacia Montoneros llegan a su punto culminante cuando señala que “la conducta montonera, en ese sentido, no se define por la elección de un medio «malo» para alcanzar un fin «bueno», sino por la idolatría del medio elegido. Asumida como objeto de culto y como fórmula de autoidentificación, la violencia queda atada a una lógica que la descalifica como medio, a la vez que descalifica como «fin» al socialismo, que resulta convertido en mera coartada” .³⁹ De esa manera, relativiza el peso de consignas tales como “un mundo mejor” o el “hombre nuevo” tan presentes en la retórica revolucionaria. Al sacralizar la violencia – pero invocando al socialismo nacional como objetivo por el cual luchar– arriesga que “inevitablemente habría modelado estructuras discriminatorias y opresivas en el Estado que pudiera haber surgido de su eventual triunfo” .⁴⁰

Salvando la patria

Un sector de la Argentina continúa

avalando la intervención militar de 1976 y considera que el golpe de estado y la represión iniciada contra los grupos “subversivos” salvaron a la patria de caer en manos de la “sinarquía internacional”. Algunas otras visiones – que encontraron cierto eco durante la década del noventa– quizás más matizadas, consideran como “terroristas” a las organizaciones político-militares y las responsabilizan con exclusividad de la violencia política, por lo que la represión estatal habría sido el único camino posible. En la actualidad, resulta difícil encontrar posiciones que nieguen que se cometieron “excesos” pero los enmarcan dentro de una “guerra” en la que el país se vio envuelto y que tuvo como triunfadoras a las Fuerzas Armadas. Lorenz engloba este tipo de discurso en lo que denomina “vulgata procesista”, un relato que considera “simbólicamente eficaz porque se apoya en claros, ausencia u omisiones en los relatos de sus antagonistas políticos, sobre todo en episodios asociados al asesinato político”.⁴¹ En verdad, las cúpulas militares ya habían emitido dos documentos oficiales en los que desarrollaron la justificación de sus intervenciones, uno de ellos en 1979 (*El Terrorismo en la Argentina*, editado por la Presidencia de la Nación) y el otro en 1983 (*Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo*), poco antes de entregar el poder y en el contexto del dictado de las leyes de autoamnistía con las que pretendieron cerrar jurídicamente cualquier posibilidad de juzgamiento futuro. El primero de estos documentos, justifica la toma del poder en 1976 en “la responsabilidad de contener la disolución

progresiva del Estado, el caos generalizado y la situación de extrema indefensión social en que se hallaba para, posteriormente, reencauzarla en la senda del orden, el trabajo fecundo y el progreso en democracia” . Ese texto se refiere permanentemente a los “delincuentes terroristas” cuyas caracterizas salientes se definían a partir de la utilización de “la violencia en forma sistemática y como procedimiento para llegar al Poder” . De la misma manera, se fundamenta la intervención militar en la “lucha antisubversiva” y la toma del poder en 1976 con “el beneplácito de) 172 (la opinión pública general” ante la evidencia de que estos grupos planificaban “la destrucción de la democracia argentina” , por lo que “pretenden, desde el exterior, pasar por víctimas lo que en verdad generaron como victimarios” . Además de realizar un listado impreciso y desordenado de las organizaciones políticomilitares, se pone especial énfasis en la complejidad de combatir con “ejércitos irregulares” con “estructuras complejas, de tipo clandestino” , que a partir de 1970 comenzaron con “una generalizada y coordinada agresión contra las instituciones del país” . En cuanto a los sucesivos gobiernos peronistas entre 1973 y 1976, el documento señala que “la problemática interna del partido gobernante fue explotada por las organizaciones terroristas, quienes incrementaron su accionar especialmente en el campo de la acción psicológica y en el militar” . Ello configuró un contexto en el que el terrorismo “seguía con una actividad muy pronunciada” , que ocasionaba que el ciudadano que iba a trabajar

- cualquiera fuera su ocupación o nivel- no estaba seguro de volver a su casa. El orden social no existía como tal. El terrorismo había comenzado una etapa en la que no solo se efectuaban asesinatos selectivos sino también indiscriminados. Nadie estaba seguro de no morir en un atentado por el solo hecho de ir a un bar a tomar un café o tomar un helado.

En el *Documento Final... se plantea* explícitamente “un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y el derecho a la vida” (p. 1). Tras admitir que el país atravesó “una experiencia que la nación jamás deberá repetir” (p. 1), en el texto se aboga por utilizar esas experiencias y así no volver a repetirlas. Por ello, sobre la base del diagnóstico acerca de la “amenaza guerrillera” que “procuraba modificar la concepción que del hombre y el Estado tiene nuestra comunidad, conquistando el poder por medio de la violencia” (p. 1), en el mencionado documento se reitera la legitimidad de la intervención militar, dado que se resumen las razones de la “lucha antisubversiva” en la necesidad de combatir esas acciones caracterizadas “por una permanente e indiscriminada violación de los más elementales derechos humanos: asesinatos, torturas y prolongados secuestros son pruebas indiscutibles de sus actos y propósitos criminales” (p. 1-2). También se formula una evaluación del funcionamiento de las organizaciones político-militares que: produjo la desviación de miles de jóvenes, muchos de ellos aún adolescentes, incorporados a las bandas mediante cualquier técnica de captación o, simplemente a través del miedo. Muchos murieron enfrentando a las fuerzas del orden,

otros se suicidaron para evitar
la captura, otros tantos desertaron,
debiendo ocultarse de las autoridades
y de sus propias bandas
(p. 2).

El escenario de caos que se describe
previo al golpe se alimenta con estadísticas
propias que señalan la concreción
de 21.642 hechos "terroristas"
entre 1969 y 1979 y la estimación de
la "estructura subversiva" en unos 25
mil miembros, de los cuales 15 mil se
clasifican como "combatientes", que
estaba "ideológicamente fanatizados
para matar" (p. 2). Si bien en el documento
se admite que las Fuerzas Armadas
tuvieron que poner en juego
) 173 (

"procedimientos inéditos", se justifican
en que "debió imponerse el más
estricto secreto sobre la información
que cubría las acciones militares,
sus logros, las operaciones en desarrollo
y los descubrimientos realizados"
(p. 3). Todo ello habría entonces
permitido que cediera la "agresión
terrorista" para que un "pueblo pacífico
y libre" (p. 3) como el argentino
pudiera recuperar la paz y la seguridad
gracias a la "derrota de los
violentos" (p. 3). En este escrito elaborado
por la cúpula militar saliente
en 1983 encabezada por el general
Bignone no se olvida recordar que
las fuerzas armadas "fueron convocadas
por el gobierno constitucional
para enfrentar la subversión" (p. 4),
por lo que destaca además que se actuó
"en defensa de la comunidad nacional
cuyos derechos esenciales no
estaban asegurados" (p. 4). En igual
sentido, se rechaza también cualquier
posibilidad de que individuos
inocentes hayan sido sistemáticamente
alcanzados por la lucha antisubversiva,
aunque se admite la comisión
de "errores". Pero se explica

que, en definitiva, “como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres” (p. 4).

En el *Documento Final*... no se puede evitar hacer referencia a los “presuntos desaparecidos”. En principio se admite que se trata de la problemática que “con más fuerza golpea los sentimientos humanitarios legítimos” (p. 5), pero a la vez “el que con mayor insidia se emplea para sorprender la buena fe de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que nos llevaron a esta situación límite” (p. 5). La explicación ofrecida indica que “las desapariciones son una consecuencia de la manera de operar de los terroristas” (p. 5), dado que como ellos modificaban sus nombres y actuaban en la clandestinidad terminaban por desaparecer de sus ambientes habituales. Además, se formula la conjetura que indica que muchos de los desaparecidos son en realidad desertores de las organizaciones revolucionarias que se tuvieron que esconder de sus propios ex compañeros, cuando no se trata del caso de quienes se suicidaron con pastillas de cianuro para evitar ser atrapados. Por supuesto, se niega tajantemente la existencia de campos de concentración, “una falsedad utilizada con fines políticos, ya que en la República no existen lugares secretos de detención, no hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente” (p. 7). Finalmente, tras expresarse un contundente “repudio a la violencia” (p. 7), se efectúa un llamado a considerar “las responsabilidades que, por acción u

omisión, les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer, otra vez, ese doloroso camino que no queremos volver a transitar” (p. 7). De ese modo, se convoca a “la reconciliación” y se concluye que “únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad de métodos injustos o muertes inocentes” (p. 8).

En los últimos años han aparecido algunas publicaciones en las que sus autores (periodistas en los casos aquí analizados) han desarrollado sus propias crónicas de los años setenta y, en sintonía con los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, han intentado rebatir cada uno de los) 174 (

puntos desarrollados por los organismos de derechos humanos. Uno de los ejes centrales sobre los que giran este tipo de posicionamientos, muy comunes en las estrategias de defensa de los militares juzgados por los crímenes durante el Proceso, apunta a la cifra simbólica de los 30 mil desaparecidos, señalando habitualmente que “solo” se trata de 5 o 6 mil, en algunos casos, u 8 mil en otros, pero se aclara que la mayoría eran “terroristas” que habían delinquido. En cierta manera, existen algunas confluencias con respecto al discurso de ciertos organismos de derechos humanos que consideran que los que fueron alcanzados por la represión efectivamente eran militantes, aunque la carga valorativa que le otorgan a esa militancia es la opuesta. Lo que sí resulta imposible encontrar entre los apólogos de la acción militar es el reconocimiento de que las responsabilidades se modificaron cualitativamente cuando las Fuerzas Armadas

decidieron, según la lógica del golpe, deponer el gobierno constitucional y tomar directamente las riendas de un Estado agredido por los extremismos de izquierda que eran financiados por potencias extranjeras. El discurso promilitar considera que en esta guerra entre ejércitos regulares (le asigna la cantidad de 5 mil combatientes a Montoneros y ERP) muchos militantes fueron víctimas de un “lavado de cabeza” ya que se trataba de un alto porcentaje de jóvenes inexpertos engañados por militantes más experimentados que además nunca los protegieron. Además, esta línea discursiva insiste en destacar la cantidad de atentados de las fuerzas “subversivas”, que en algunos casos estabilizan en más de 20 mil entre fines de los sesenta y los últimos años de los setenta. Esos datos que consideran probados les hacen reclamar que la ley también caiga contra responsables de esos atentados que en la actualidad reivindican su militancia revolucionaria e incluso ocupan cargos públicos. Además, por supuesto, se niega que los militantes revolucionarios hayan tenido verdaderos ideales y los reducen a una “cultura de la muerte” traducida hoy en “espíritu revanchista”. Otro de los puntos centrales de los argumentos de este tipo radica en destacar la corresponsabilidad en la represión de los civiles, en especial el gobierno de María Estela Martínez que inició la “lucha antisubversiva” y sancionó (bajo la presidencia interina de Ítalo Argentino Lúder) los decretos de aniquilamiento de la “subversión” en 1975. Como muestras representativas, aunque por supuesto no exclusivas, se toman las producciones de

dos periodistas claramente identificados con mostrar “la otra parte de la verdad” que según ellos ha sido ocultada por los sucesivos gobiernos democráticos y una opinión pública actual proclive a reivindicar los ideales de la lucha revolucionaria. El análisis del abogado y periodista Nicolás Márquez retoma el viejo argumento de que se trató de una guerra que fue declarada por los terroristas de izquierda, a quienes las Fuerzas Armadas les respondieron “en un escenario que ellas eligieron y al cual los militares debieron adecuar su estrategia, sus tácticas y técnicas de combate, así como su organización con un criterio puramente profesional”.⁴² Márquez considera una “epopeya” el triunfo contra “el terrorismo y la subversión marxista con la consiguiente restauración de) 175 (la paz y el orden” ,⁴³ aunque ahora sea ello lo que se les cuestiona a los militares que, en vez de ser homenajeados, son humillados, perseguidos y denigrados. En principio Márquez cuestiona que “el maniqueísmo explicativo de los deformadores de la verdad consta de tan alto grado de estereotipación, que pareciera que aquí había buenos (izquierdistas o «jóvenes idealistas») por un lado, y malos (FF. AA, FF. SS, y policiales) por el otro. Vale decir, que ni en las aventuras de Superman se ha caricaturizado a dos bandos de forma tan simple y grotesca” .⁴⁴ Sin embargo, no logra salir de ese maniqueísmo, aunque invirtiendo los términos. A pesar de que condena las caricaturas, es precisamente lo que construye cuando describe a los “izquierdistas” , retratándolos como bestias sedientas de sangre que buscaban

coartar todas las libertades públicas
y sobre todo perseguían la anulación
de las clases sociales. Las “poderosas
organizaciones terroristas” que
actuaron “durante una interminable
década” ⁴⁵ forzaron según su óptica,
la intervención militar porque se trataba
de una verdadera amenaza, lo
cual es uno de los puntos centrales
en el debate sobre el terrorismo de
estado.

Sin ahorrarse gruesas adjetivaciones,
algunas francamente de muy
mal gusto, ⁴⁶ Márquez señala que
cualquier intento de ofrecer una mirada
diferente sobre los años setenta
se transforma en “blanco de «*escraches*
», campañas de desprestigio público
y juicios penales por «*apología
del delito*», negando la disidencia y el
pluralismo que dicen reivindicar” .⁴⁷

Por supuesto, este autor no duda en
apelar a un dato histórico que es reconocido
incluso trabajos académicos
que han estudiado el período: la
legitimidad de origen del golpe militar.

Sobre esa base, considera que
el orden político estaba quebrado y
que tanto los partidos políticos, los
sectores empresariales, sindicales y
religiosos apoyaron masivamente el
golpe. De las consecuencias de ese
golpe, sostiene que “ni fueron 30.000
los desaparecidos, ni eran «idealistas
» inofensivos que querían un mundo
mejor. Eran terroristas, y como tales
fueron combatidos” ⁴⁸. Otro de los
puntos en los que insiste Márquez es en
el poder militar y político de la guerrilla,
a la que le adjudica una “impecable
profesionalidad” ,⁴⁹ además
de detallados códigos de guerra y
estructura de inteligencia. En consonancia
con las justificaciones del accionar
represivo cita, como es lógico,
el decreto de aniquilamiento de

la subversión rubricado en pleno gobierno democrático, del cual los políticos consiguieron, mediante “extravagantes acrobacias verbales” ,⁵⁰ negar lo que le mandaron hacer a los militares. Por ello es que afirma que el Proceso militar fue de alguna manera una continuidad de las políticas seguidas en tiempos de democracia peronista. De cualquier manera, tampoco niega que hayan existido violaciones a los derechos humanos, pero las considera “producto de excesos y desbordes propios de la guerra y del odio que fueron adquiriendo las FF. AA. contra sus enemigos” .⁵¹ Además, entiende que los militares se equivocaron al permanecer más tiempo que el que les requirió ganar “la guerra antiterrorista” y ordenar al país. En la misma sintonía admite que las Fuerzas Armadas pueden haber actuado “desprolijamente” ,⁵² aunque lo justifica en que no existían “mecanismos legales o procesales para des)

176 (

empeñarse en una guerra interna” .⁵³ Sin embargo, los errores y excesos – que admite– se cometieron contra “terroristas” que amenazaban las bases mismas de la sociedad. El periodista Carlos Manuel Acuña ha publicado una serie de libros en los que intenta poner de manifiesto la falsedad de lo que denomina “historia oficial” , en alusión a la condena a la represión militar. Sus publicaciones pueden resumirse en la incomodidad que le genera que “los terroristas de ayer son aceptados como presuntos idealistas y quienes debieron enfrentarlos son presentados como sanguinarios patológicos movidos únicamente por un mórbido sentimiento de violencia” .⁵⁴ En líneas generales, dominan los prejuicios

que proponen divisiones tajantes tales como gente “sana” y los militantes “izquierdistas” (también llamados “activistas”) o los vínculos del comunismo con el amor libre, la apología de la homosexualidad y el consumo de drogas. Junto con ello, Acuña identifica una serie de conjuras internacionales que, aunque procedentes de la izquierda, terminan favoreciendo los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Forman parte de esas conjuras, por ejemplo, los organismos que defienden “derechos humanos parciales, politizados e ideologizados”.⁵⁵

En el marco de una lógica castrense que apela permanentemente a posicionamientos morales, Acuña se refiere de manera reiterada a los “izquierdistas”, a quienes responsabiliza (como a Raúl Alfonsín) por fenómenos como la violencia política de los años setenta o el descenso actual en la calidad educativa. Todo ello queda al servicio de “Pensamiento Único” que, en nombre de la democracia, impone una “obligada interpretación histórica fuera de la cual hasta se corre el riesgo de incurrir en delito”.⁵⁶ La ofensiva más fuerte apunta a Montoneros, a quienes culpa por una época caracterizada por “las bombas, los tiroteos, los muertos, el choque, en fin, fueron el signo de esos meses”.⁵⁷ Comentarios similares apuntan al comportamiento de la Juventud Peronista en las universidades, a las que ocuparon “como si fueran plazas enemigas conquistadas militarmente, persiguieron a profesores y alumnos y llegaron a producir miles de ocupaciones físicas de edificios y dependencias del estado nacional y de las provincias, presionaron a legisladores y concejales

y en las cinco provincias en las que eran gobierno mantuvieron en jaque a la población” .⁵⁸ Sobre ese tipo de ocupaciones de los organismos públicos que protagonizó la Juventud Peronista (canales de televisión, centrales de energía, establecimientos educativos, escuelas, oficinas públicas como los correos, los hospitales), señala que “había gente que gritaba, que dormía y comía en el suelo y en medio de la violencia, un desorden mayúsculo se había instalado para dictar sus propias reglas. Curiosamente, los jóvenes contestatarios actuaban como si no integraran la fuerza política en el poder. Disolventes, parecían la expresión de una virulenta oposición y de hecho, comenzaba el ataque contra el gobierno constitucional” .⁵⁹

Los libros de Acuña están dirigidos a cuestionar las organizaciones guerrilleras, aspecto fundamental para una estructura argumentativa que descansa en definir el mal que debía combatirse como aspecto esencial que justifica la represión poste)

177 (

rior. En ese orden de cosas, denuncia una apropiación ilegítima de las banderas peronistas por parte de las organizaciones revolucionarias, a las que acusa de haber interpretado a su antojo el pasado del movimiento y utilizar las universidades como centros de propaganda y reclutamiento para una “cultura de la muerte” .⁶⁰ Elabora además una clara defensa de la derecha peronista en los sucesos de violencia política desatados durante el tercer gobierno de Perón y el de su esposa, María Estela Martínez. En todo el libro *Por amor al odio*, en su intento de cuestionar el accionar de las organizaciones guerrilleras,

se burla de que “invocaban a las clases populares como destinatarias excluyentes de su proyecto, hablaban en nombre de las *mayorías obreras, desposeídas y postergadas* pero no lograban ni sus simpatías ni penetrar exitosamente con líneas propias en las estructuras de representación sindical” ⁶¹. Llega incluso a desconocer las fuertes bases de legitimidad que despertó Montoneros, optando por apelar a prenociones del sentido común científico al reducir las luchas revolucionarias a “mera rebeldía”, vaciando de contenido un fenómeno de suma complejidad. Por ello, califica permanentemente de “minoritarios” a los sectores revolucionarios que, a través de postulados gramscianos vinculados con la lucha cultural, cooptaron los ámbitos educativos. Dentro de ese panorama de conjuras de la izquierda avaladas por la Unión Soviética en el marco de la guerra fría, el ministro de Economía de Perón, el empresario José Ber Gelbard, es señalado como agente de la KGB, como también llega a justificar atentados de la Triple A, como el que sufrió el dirigente radical Hipólito Solari Irigoyen, a quien señala como “colaborador” de la guerrilla. Como la gran mayoría de quienes justifican el golpe, considera que la guerrilla constituía una seria amenaza para el Estado, ya que contaba con “arsenales, imprentas y elementos de comunicaciones de alta tecnología, pero los acontecimientos continuaban y se respiraba un clima de guerra como jamás había existido” ⁶².

La reivindicación revolucionaria

Pese a una inicial condena, las organizaciones guerrilleras (particularmente Montoneros) han ido ganando cada vez mayor legitimidad

en la opinión pública argentina. Luego de que se instaurara la *teoría de los dos demonios* y se cuestionara severamente a la conducción nacional de Montoneros (en especial la figura de Mario Eduardo Firmenich), la acción de organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, y la presencia de ex – o al menos presuntos– militantes de la Juventud Peronista de la época en cargos públicos de relevancia (como la actual presidenta de la Nación y el anterior jefe de Estado) han contribuido a una reparación del accionar guerrillero y los ideales de parte de esa generación que eligió el camino de las armas bajo la consigna de que “lucharon hasta la muerte por sus ideales” en busca de “un mundo mejor”, en concreto, una generación que “comprometió su vida en una lucha destinada a lograr un cambio político y socio-cultural signado por la Justicia” .⁶³ Esta línea propiciada desde las altas esferas de gobierno y que es fervientemente apoyada por gran parte de los organismos de derechos humanos (entre ellos Madres) 178 (y Abuelas de Plaza de Mayo) ha tenido una activa intervención en los debates públicos sobre el tema. Incluso, en ocasión de recordarse los treinta años del golpe militar, la nueva edición de *Nunca Más* incorporó un nuevo prólogo más afín a la nueva interpretación oficial de la violencia política de los años setenta. Ese escrito emanado desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señala que “es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria

en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables” . En una obvia alusión a las conclusiones vertidas en el prólogo anterior del informe de la CONADEP, se sugiere que las anteriores intervenciones habían sido funcionales a la *teoría de los dos demonios*. Por ello, en el inicio del prólogo se aclara que:

nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las ineludibles exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas.

El texto no olvida, por supuesto, recordar las claudicaciones de los anteriores gobiernos democráticos ante las presiones militares (las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida” durante la presidencia de Alfonsín y los indultos presidenciales de Carlos Menem) y destacar la anulación de las mencionadas “leyes de impunidad” y la firme adopción del criterio de “lesa humanidad” para los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado. En cuanto a la propuesta de análisis de la represión militar el nuevo prólogo señala que:

la dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. La pedagogía

del terror convirtió a los militares
golpistas en señores de la vida y
la muerte de todos los habitantes
del país. En la aplicación de estas
políticas, con la finalidad de evitar
el resurgimiento de los movimientos
políticos y sociales la dictadura
hizo desaparecer a 30.000 personas,
conforme a la doctrina de la
seguridad nacional, al servicio del
privilegio y de intereses extranacionales.
Disciplinar a la sociedad
ahogando en sangre toda disidencia
o contestación fue su propósito
manifiesto.

Hacia el final de texto, se postula
que “actualmente tenemos por
delante la inmensa tarea de revertir
una situación de impunidad y de injusticia
social, lo que supone vencer
la hostilidad de poderosos sectores
que con su complicidad de ayer y de
hoy con el terrorismo de Estado y las
políticas neoliberales la hicieron posible” .
El análisis de Crenzel destaca
que el nuevo prólogo invierte la interpretación
de la CONADEP, pero
vuelve a caer en una mirada “totalizante,
en la que el pueblo, sin fisuras,
enfrenta el terror dictatorial y
) 179 (

la impunidad. Esta perspectiva simplifica
la historia de la lucha por los
derechos humanos al eclipsar la soledad
que rodeó a los denunciantes
del crimen durante la dictadura,
desconociendo que las luchas por la
verdad, la justicia y la memoria no
fueron simultáneas y omitiendo la
pluralidad de lecturas sobre ese pasado
que se expresan en el país” .⁶⁴
El mismo autor señala que la explicación
del terrorismo de estado desecha
cualquier vínculo con la actividad
guerrillera, a la cual además no
condena. Además, “el nuevo prólogo
privilegia la asociación entre la dictadura
y el intento de clausurar el modelo

de acumulación de capital y distribución
del ingreso forjado por el
primer peronismo dejando de lado,
a la vez, toda mención al reordenamiento
político autoritario que pretendió
fundar tras el Golpe de marzo
de 1976” .⁶⁵ Del mismo modo, el
prólogo abandona cualquier idea de
ruptura con el orden vigente en 1976
a partir del retorno de la democracia
e “insiste en vincular el terror de Estado
con un modelo económico y social
y en comprender a la democracia
no ya como una ruptura *per se* con el
pasado sino como un orden que prolongó
ciertas premisas instaladas en
la dictadura” .⁶⁶ Por ello, asegura que
pese a los distintos enfoques interpretativos
de ese pasado reciente,
perdura “una matriz de la memoria
que rehuye historizar los enfrentamientos
que desgarraron a esta sociedad
en términos complejos” .⁶⁷

También Carlos Altamirano cuestiona
esa nueva versión oficial, a la que
califica como:

la más elemental y sobrevuela toda
complicación respecto del pasado.
Si la «teoría de los dos demonios»
se edificaba en torno de la imagen
de una sociedad inocente, víctima
pura de una violencia que no guardaba
ningún lazo con ella, la interpretación
que el gobierno transmite
estiliza la militancia de los años
setenta y borra, por medio de esa
estilización, no solo a los partidos
armados de la época, sino la guerra
intestinal dentro del peronismo,
la Triple A, en fin, todo aquello
que fue degradando la vida pública
nacional antes del golpe de
Estado.⁶⁸

En los últimos años resulta sencillo
encontrar publicaciones que, en
clave periodística, autobiográfica o
panfletaria, reivindiquen la opción
revolucionaria por el camino de las

armas de parte de la juventud argentina.

Las invariantes más recurrentes de estos discursos admiten serios errores de organizaciones como Montoneros, pero responsabilizan casi con exclusividad a una conducción nacional engegueda por la opción militarista, en el mejor de los casos, o infiltrada por los servicios de inteligencia, en el peor de los casos. El relato retrospectivo de Amorín para referirse a los sucesos de Ezeiza es bastante claro al respecto:

Un Firmenich que solo puede recuperar su quimérico pedestal sobre el cual él mismo se había situado ya no a partir de heredar a Perón sino de vencerlo. De enfrentarlo. Y para ello debe transmutarse y, con él, transmutar a la organización que conduce. Lo hizo. Tal como tantas veces lo hicieron los pontífices con la Iglesia. Apoyado por un entorno poco numeroso pero coherente en la simpleza de su pensamiento, favorecido por la rigidez piramidal de la organización, amparado por la (buena) Fe de sus hermanos para imponer la) 180 (

eficiencia mecanizada de un verticalismo tranquilizador.⁶⁹

En los esfuerzos por resguardar la pureza de la masa de militantes y las causas que llevaron a la formación de las organizaciones político-militares, el mismo Amorín incluso sostiene que Firmenich y Quieto (el segundo en jerarquía de la conducción nacional, proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR) desecharon los ofrecimientos de Perón de entregarles completamente la juventud, la libre movilidad en el Partido, el control completo de la universidad y la cartera de desarrollo social, que finalmente quedó en manos de José López Rega. En esa

línea, la militancia revolucionaria es presentada como sinónimo de una superioridad moral que opera como sustento para una metanarrativa que permite justificar cualquier acción en tanto sea cometida en la búsqueda de ese mundo mejor. También algunas producciones audiovisuales abonan tesis similares. En relación al film *Cazadores de utopías*, de Eduardo Blaustein, Altamirano afirma que la interpretación de ese pasado se construye: como si el pasado siguiera presente, bloqueando casi el trabajo de la diferenciación temporal e imponiendo sus propias categorías, todos ellos parecen no poder hablar sino como entonces, sumidos en el mito, para reproducir, de acuerdo con el libreto, algunas de sus partes. Aparecen, por supuesto, marcas del tiempo. El grupo dirigente de Montoneros, la «conducción», resulta cuestionado, aunque no se den nombres (lo que no deja de ser un síntoma de que hay cuentas que aún no fueron hechas); excepto uno de los ex militantes, el resto no manifiesta la expectativa por el retorno de aquel tiempo y la reanudación de la marcha ininterrumpida.

70

Algo similar ocurre en *Perejiles*, donde Adriana Robles expresa esta mirada sobre la propia participación en el fenómeno montonero: “porque fuimos seres puros en esencia, que hicimos política desde la única forma posible: por los otros y desinteresadamente sin pensar en cargos o recompensas. ¿De qué nos hubieran servido los cargos si no lográbamos cambiar la vida de nuestro pueblo?”.⁷¹ Similares apreciaciones están a cargo del escritor Osvaldo Bayer, quien asegura que “los autores de la teoría de los dos demonios no se atrevieron a enfrentar, a comparar este documento

con los de aquella juventud que quería terminar con dieciocho años de abuso del poder, con la mentira acerca de los alcances de la palabra democracia y represión. Dieciocho años de burla a la Constitución y a las instituciones representativas del pueblo” .72

En el mismo registro, y en un libro apologético de los militantes del ERP, Julio Santucho (hermano del líder de la organización, Mario Roberto Santucho) considera que “los abnegados guerrilleros solo podían servir para vencer las reticencias de los gorilas recalcitrantes en el arduo camino de retorno al poder. Una vez llegados allí, el modelo de «democracia integrada», que reservaba al sindicalismo peronista un papel preponderante, no preveía apertura alguna hacia el idealismo de la juventud contestataria” .73 Aunque este mismo autor admite que algunos asesinatos perpetrados por las organizaciones guerrilleras fueron “injustos)

181 (tíficables, eran organizaciones populares cuyos militantes exponían sus vidas para resistir la represión con el objetivo de ampliar los márgenes de participación democrática de la sociedad” .74

Conclusiones

Se han analizado aquí tres “regímenes de memoria” referidos al terrorismo de estado, que dan cuenta de los principales combates por el significado de la historia reciente de la Argentina. Memorias que si bien están matizadas por sus distintos niveles que tienen que ver con quien recuerda y de qué modo plantea su versión de la historia, han sido englobadas en tres regímenes que dan cuenta de tres grandes discursos que han logrado, en sus respectivas circulaciones,

los más potentes efectos de reconocimiento. En estas luchas políticas por la memoria sobre este pasado conflictivo, están involucradas “una multiplicidad de construcciones que se encuentran en el mundo subjetivo, en el conjunto social y en la relación entre ambos campos, en los diferentes dilemas, discursos y sentidos” .⁷⁵ Lejos de otorgarles – en este artículo– rigor histórico, estos tres discursos han intentado en diversas épocas posicionarse como las lecturas hegemónicas en torno a ese pasado polémico que despierta tantas pasiones y controversias. Se trata en líneas generales de regímenes de memoria cuya conformación “es compleja ya que supone la adopción, por diversos actores, de núcleos propositivos comunes para evocar el pasado. Sin embargo, nunca un régimen de memoria logra uniformizar la evocación del pasado, o evitar que circulen interpretaciones diferentes u opuestas a sus postulados” ⁷⁶. Inclusive un régimen de memoria – el “democrático” – puede proyectar diferentes versiones (una débil y una fuerte) capaces de postular interpretaciones que – si bien no son antagónicas– presentan sensibles contrastes. Al expresar vínculos entre distintos actores políticos, esos regímenes apuntan a cristalizar marcos interpretativos estables que no sean susceptibles de revisión empírica. De algún modo siempre auspiciados por el Estado (en el caso de la reivindicación del papel de las Fuerzas Armadas con cierto anacronismo), esos discursos propusieron un cierre del estado de la cuestión sostenido en evocaciones selectivas de los sucesos pasados que se anclan fuertemente a los valores hegemónicos

del tiempo histórico en el que fueron
formulados. Aquí se han tomado estos
regímenes a modo de discursos
nativos que fueron elaborados en la
sociedad argentina en diversas épocas,
como muestras de una lucha
ideológica por la interpretación de
un pasado político controversial. En
efecto, pese a las pretensiones historiográficas
que en ocasiones se arrojan
esas lecturas, este artículo los
presenta como configuraciones discursivas
nativas emergentes de condiciones
sociohistóricas precisas. En
todos los casos, como bien han marcado
algunos de los autores referenciados,
estos discursos deshistorizan
los conflictos, resolviéndolos de antemano
a partir de categorías axiológicas
que definen, *a priori*, cualquier
posibilidad de un análisis profundo
que no caiga en estilizaciones, “vulgatas”
o apologías generacionales.

Quizás sin demasiadas posibilidades
de impactar en la opinión pública y
en las políticas de memoria del es)

182 (

tado, las ciencias sociales tienen por
delante un enorme abanico de referentes
empíricos para seguir comprendiendo
los sesenta y los sesenta
y proveer miradas analíticas sobre
ese período de la historia argentina.
Es decir, aquellos años no solo pueden
ser abordados a partir del estudio
de los grupos directamente implicados
en la violencia política. Por
ello, el estudio de casos específicos,
como las universidades, los partidos
políticos, los sindicatos, los movimientos
artísticos, los medios de comunicación,
las propias políticas oficiales
de derechos humanos (como el
Nunca Más) o los mitos (en el sentido
antropológico del término) políticos,
pueden permitir una comprensión

que escape de los reduccionismos tan marcados de las interpretaciones hegemónicas sobre el terrorismo de estado. □

Notas

1. Carlos Altamirano, "Pasado presente" . En C. Lida; H. Crespo & P. Yankelevich (comps.) *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*, Buenos Aires, FCE, 2008, p. 17.
2. Juan Suriano, "Introducción" . En *Entrepasados. Revista de Historia*, Año XIV, N° 28, 2005, p. 7.
3. M. Franco & Florencia Levín, "El pasado cercano en clave historiográfica" . En M. Franco & F. Levín (comps.) *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 31.
4. Sergio Visacovsky, "Entre lo *evidentemente sucedido* y lo *posiblemente experimentado*: para una reconciliación entre historia, memoria social y análisis narrativo" . En *Entrepasados. Revista de Historia*, XIII, n° 26, 2004, p. 134.
5. *Ibíd.*, p. 135.
6. Emilio Crenzel, *La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 24.
7. Elizabeth Jelin & Susana Kauffman, "Los niveles de la memoria: reconstrucción del pasado dictatorial argentino" . En *Entrepasados. Revista de Historia*, N° 20/21, 2001, p. 9.
8. *Ibíd.*, p. 29.
9. Daniel Feierstein, *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.
10. Esta afirmación surge de un trabajo empírico que se concentra primordialmente en el período anterior al golpe de estado y además está referida a la constitución del campo de las ciencias sociales en la Argentina entre los años sesenta y setenta, que se vieron atravesadas estrechamente por la política e incluso por las discusiones y objetivos de la militancia revolucionaria, a la cual también influenciaron de forma directa. Puntualmente, la etnografía de la carrera de antropología que se dictó en la Universidad Provincial (nacionalizada desde 1975) de Mar del Plata permite estudiar una problemática directamente vinculada a las cuestiones políticas mencionadas más arriba que afectaron al campo disciplinar. En este caso específico, la represión tuvo su primer momento en el desmantelamiento de las carreras de ciencias sociales desde 1974,

en pleno gobierno democrático. Muchos profesores comenzaron a retirarse, otros fueron expulsados y los proyectos originales de ciencias sociales fueron desmantelados, junto con una represión estatal y para-estatal que también se cobró la vida de muchos estudiantes.

11. Hugo Quiroga, *El tiempo del “proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983*, Rosario, Homo Sapiens, 2004, p. 15.

12. María Matilde Ollier, *Golpe o revolución. La violencia legitimada, Argentina 1966/1973*, Buenos Aires, Eduntref, 2005.

13. Marcos Novaro & Vicente Palermo, *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, p. 31.

14. . *Ibíd.*, p. 33.

15. Feierstein califica de “negacionistas” y “democratistas” a aquellas interpretaciones (políticas, académicas) que cuestionan la militancia revolucionaria y la oponen a los valores democráticos que deberían defenderse para asegurar el bienestar general. El mismo autor asegura que este tipo de enfoques produce “indistinción”, porque “el modelo toma los efectos de «despolitización» que produce

) 183 (

la masacre como «causa» de la misma. En una novedosa interpretación, se tiende a calificar a los hechos como una «guerra antisubversiva» (en verdad, calificación que le dieron al genocidio sus propios perpetradores), en la cual se habría operado sobre el conjunto social como modo de «desmembrar a la guerrilla». Véase

D. Feierstein, *ob. cit.*, 2006, p. 302.

16. La CONADEP se conformó en 1984 con diez integrantes escogidos por el Presidente de la Nación Raúl Alfonsín (Ricardo Columbres, René Favalaro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato) y tres miembros elegidos por la Cámara de Diputados (Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte), además de cinco secretarios (Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira). La tarea encomendada consistía en reunir testimonios directos vinculados con el terrorismo de Estado y presentar un informe al primer mandatario, que se concretó el 20 de Septiembre de 1984. La Comisión se encargó de relevar la mayor cantidad posible de secuestros, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos,

para lo cual se documentaron en archivos numerados. Si bien la Comisión no tenía como tarea juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, sugirió que se iniciaran las acciones legales correspondientes.

17. Emilio Crenzel, *ob. cit.*, 2008, p. 59.

18. CONADEP, *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 2003.

19. *Ibíd.*, p. 7.

20. Emilio Crenzel, " Dos prólogos para un mismo informe. El Nunca Más y la memoria de las desapariciones" . En *Prohistoria*, XI, 11, 2007, p. 54.

21. *Ibíd.*, p. 54.

22. Florencia Levín, "Arqueología de la memoria. Algunas reflexiones a propósito de *Los vecinos del horror*. Los otros testigos" . En *Entrepasados. Revista de Historia*, Año XIV, 2005, p. 51.

23. *Ibíd.*, p. 52.

24. *Ibíd.*, p. 55.

25. Pablo Giussani, *Montoneros. La soberbia armada*, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, p. 244.

26. *Ibíd.*, p. 244.

27. *Ibíd.*, p. 246.

28. *Ibíd.*, p. 215.

29. *Ibíd.*, p. 217.

30. *Ibíd.*, p. 217.

31. *Ibíd.*, p. 25.

32. *Ibíd.*, p. 26.

33. Giussani estuvo estrechamente relacionado con la organización Montoneros, ya que ocupó el cargo de secretario de redacción del diario *Noticias*, que era sostenido por esa organización político-militar. A lo largo de su libro detalla muchas de las conversaciones mantenidas con el responsable político del periódico, el poeta Francisco "Paco" Urondo.

34. *Ibíd.*, p. 40.

35. *Ibíd.*, p. 41.

36. *Ibíd.*, p. 43.

37. *Ibíd.*, p. 83.

38. *Ibíd.*, p. 88.

39. *Ibíd.*, p. 100.

40. *Ibíd.*, p. 107.

41. Federico Lorenz, "«Recuerden, argentinos »: por una revisión de la Vulgata procesista" . En *Entrepasados. Revista de Historia*, Año XIV, 28, 2005: p. 66.

42. Nicolás Márquez, *La otra parte de la verdad. La respuesta a los que han ocultado y deformado la verdad histórica sobre la década del '70 y el terrorismo*, Buenos Aires: Studio Gráfico, 2004, p. 10.

43. *Ibíd.*, p. 107.

44. *Ibíd.*, p. 14.

45. *Ibíd.*, p. 149.

46. El libro de Márquez tampoco brilla

por méritos literarios. Está escrito con un lenguaje

que por momentos se aleja notablemente

de los registros cultos, al utilizar expresiones

tales como “sudando la gota gorda” o

“tomada de pelo”. En esa línea, la mayoría

de sus categorizaciones apelan a subjetivemas

que rozan – y en algunos casos llegan –

al insulto directo. Por ejemplo, se refiere a los

políticos en democracia como “caterva de demagogos”

y cuestiona a los “terroristas al servicio

del comunismo”. No se priva tampoco

de hacer referencia a “presidentes marxistas”,

“terroristas”, “izquierdistas”, términos

mucho más leves que “verdadero conjunto

de extraviados”, con el que categoriza a los

milитantes revolucionarios.

47. *Ibíd.*, p. 15.

48. *Ibíd.*, p. 25.

49. *Ibíd.*, p. 26.

50. *Ibíd.*, p. 54.

51. *Ibíd.*, p. 71.

52. *Ibíd.*, p. 102.

53. *Ibíd.*, p. 102.

) 184 (